

Recomendación General No. 8/2025

Aguascalientes, Aguascalientes, a dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco

VISTO para emitir la presente Recomendación General, sobre el resultado de la visita de supervisión para verificar los derechos de las personas en situación de detención la que versó sobre, alojamiento, higiene de las celdas, servicios médicos, contacto con el mundo exterior y en general las condiciones en las que se encuentran las instalaciones del centro de detención municipal de El Llano, Aguascalientes, en la que se observaron diversas situaciones que afectan sus derechos, teniendo en cuenta los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En fecha quince de septiembre del año dos mil veinticinco se realizó visita de supervisión al centro de detención municipal de El Llano, Aguascalientes, de conformidad con el acta circunstanciada levantada por personal adscritos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, en la que se asentó que al entrevistar al Juez Calificador en turno manifestó que a las personas detenidas se les permite realizar llamada telefónica a su familia, abogado o persona de su confianza, pero no realizan registro de esa acción. Al momento de la visita de supervisión el centro de detención no contaba con personal médico ni área médica, tampoco había material para primeros auxilios y medicamento del cuadro básico, y durante el recorrido se observó que las celdas carecen de lavamanos para que las personas detenidas se laven las manos y no existe un área para ello.

II. CONSIDERANDO

2. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes es un organismo constitucional autónomo de protección y defensa de los derechos humanos y que posee la facultad de emitir recomendaciones públicas a las autoridades de carácter estatal o municipal, según disposición expresa de los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y 6 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes.

3. Dentro de las facultades que tiene este órgano público autónomo protector de derechos humanos está la de supervisar que las condiciones de las personas privadas de su libertad que se encuentren en los separos de la Policía Ministerial, Seguridad Pública, Centros de Internamiento o Centros de Reinserción Social, estén apegadas a la ley y se garantice el pleno respeto a sus Derechos Humanos, lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 9º fracción VII de la Ley Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, por lo que el personal de la Comisión deberá tener acceso a las personas privadas de su libertad.

4. El artículo 9 fracciones VIII, XV y XXII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos señala que entre las facultades de la Comisión estarán: formular opiniones de carácter general que contribuyan al conocimiento y difusión de la cultura del respeto a los derechos humanos, velar por el cumplimiento de las normas que consten en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales y que tienen como objetivo la tutela y promoción de los Derechos Humanos, asimismo, vigilar permanentemente el cabal cumplimiento del respeto de los Derechos Humanos en todas las dependencias estatales y municipales. El artículo 1º párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como obligación que las normas de derechos humanos sean interpretadas conforme a los

República de Perú 502, Jardines de Santa Elena,
C.P. 20236, Aguascalientes, Ags. México

Teléfono (449) 140 7870

www.dhags.org

Instrumentos internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

5. Por su parte el artículo 19 fracciones XVI y XX del ordenamiento antes citado dispone que es facultad de la o el presidente de la Comisión solicitar el auxilio de autoridades competentes a efecto de obtener la información necesaria para la defensa de los Derechos Humanos, así como aprobar y emitir las recomendaciones públicas que resulten de las investigaciones realizadas por la Comisión.

6. En términos de las facultades citadas, este organismo debe supervisar que las autoridades garanticen el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de toda persona, y con mayoría de razón de aquellos grupos de atención prioritaria, y para tal efecto deberá recomendar medidas tendientes a salvaguardarlos frente a las amenazas, perturbaciones, restricciones o violaciones de cualquier autoridad.

7. Por ministerio de la ley se impone como deber de colaboración a las diferentes autoridades de la administración pública, a fin a que en atención a sus competencias protejan, respeten y garanticen los derechos humanos, siendo el espíritu que campea en el tercer párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. En este tenor, y a fin de salvaguardar los derechos humanos de las personas detenidas en el centro de detención municipal de El Llano, Aguascalientes se analiza lo siguiente:

9. En la recomendación 49VG/2021 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno se señala que la dignidad humana implica el valor inherente al ser humano por ser un ente racional, lo que se traduce en el derecho que las personas tienen a ser valoradas como sujeto individual y social, con sus características y condiciones personales, pero en igualdad de circunstancias. Así, la dignidad de una persona es el soporte de sus derechos humanos, los que son inmutables, inherentes e inalienables y por lo mismo inviolables, en este sentido son contrarios a la dignidad, los tratos indignos, vejatorios, humillantes y ofensivos, así como la desigualdad.¹

10. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que *“Toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos”*.² También resolvió que: *“Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna”*.³ Por lo que, *“Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último*

¹ CNDH. Recomendación 49VG/2021, Sobre el caso de violación grave a los derechos humanos al trato digno, a la integridad y seguridad personal por actos de tortura y violencia sexual, así como a la seguridad jurídica y a la legalidad, en agravio de V, persona privada de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social No. 13, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, emitida el 29 de noviembre de 2021, pág. 15.

² “Caso *“Neira Alegría y otros Vs. Perú”*, (Fondo), sentencia de 19 de enero de 1995, p. 60.

³ Caso *“Mendoza y otros vs. Argentina”* 27.002, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones. 14 de mayo de 2013, p. 7, punto 188.

debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar”⁴.

11. El trato digno consiste en *“la prerrogativa que tiene todo ser humano a que se le permita hacer efectivas las condiciones jurídicas, materiales, de trato, acordes con las expectativas, en un mínimo de bienestar, generalmente aceptadas por los miembros de la especie humana y reconocidas por el orden jurídico”*.⁵

12. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que: *“la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal, así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos”*.⁶

13. La prisión y demás medidas cuyo efecto es separar a una persona del mundo exterior son afflictivas por el hecho mismo de que despojan a esa persona de su derecho a la autodeterminación al privarla de su libertad. Por lo tanto, el sistema de los centros de detención no deberá agravar los sufrimientos inherentes a tal situación.⁷

14. Los Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, define a la persona privada de su libertad como *“cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea una institución pública o privada en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria”*.⁸

15. Los numerales 5.2 y 5.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la que el Estado Mexicano es parte integrante, establecen que nadie debe ser

⁴ Caso “Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras” 12.680 Fondo, Reparaciones y Costas. 27 de abril de 2012, p. 20, punto 64.

⁵ José Luis Soberanes Fernández, coord., Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos Humanos, México/CNDH 2008, pág.73.

⁶ Semanario Judicial de la Federación, enero de 2011. Registro 163167.

⁷ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)(Viena: Asamblea General, resolución 70/175, anexo, 2015), Página 3.

⁸ Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, 2008.

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto inherente al ser humano.

16. En los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, se consagran derechos humanos que deben ser respetados y garantizados a las personas privadas de libertad, como es el caso del Principio I que hace referencia al trato humano y que establece que *“Toda persona privada de la libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En particular, y tomando en cuenta la posición especial de garante de los estados frente a las personas privadas de libertad se les respetará y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad. Se les protegerá contra todo acto de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, castigos corporales y todos aquellos métodos que tengan como finalidad anular personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona”*⁹. Y establece condiciones mínimas para que se respete y garantice la dignidad a las personas privadas de la libertad.

17. En la entrevista que se realizó al Juez Calificador en turno durante la visita de supervisión el quince de septiembre del año dos mil veinticinco dijo que a las personas detenidas se les permite realizar llamada telefónica a su familia, abogado o persona de su confianza, pero no realizan registro de esa acción. Al respecto el artículo 1184 del Código Municipal El Llano señala la obligación del oficial responsable de la guardia de dejar constancia en un libro sobre el control de las llamadas permitidas a las personas detenidas, debiendo hacer constar el número telefónico al que llame, la hora en que se realiza la llamada, y de ser posible el nombre de la persona con quien se entrevistó vía telefónica, así como la firma de la persona detenida donde acepta haber realizado dicha llamada, por lo que resulta imperativo que la autoridades municipales realicen las acciones conducente para dar cumplimiento a la citada disposición legal y conste registro escrito de la forma en que hacen efectivo los derechos humanos a las personas detenidas.

18. El Juez Calificador en turno, manifestó que al momento de la visita de supervisión el centro de detención no contaba con personal médico ni área médica, tampoco había material para primeros auxilios y medicamento del cuadro básico, por lo que, si le ponían a disposición a una persona detenida que estuviera lesionada, solicitaba la presencia de los paramédicos para que atendieran a la persona y si era necesario la trasladaban al hospital más cercano. El artículo 1177 fracción IV del Código Municipal de El Llano del Estado de Aguascalientes señala que le corresponde al Director de Seguridad Pública y Validad Municipal solicitar la asignación de un área médica en la que deberá de existir un médico responsable de la guardia a fin de dar atención médica a las personas detenidas en el centro de detención. Esta situación se reitera en el artículo 1191 del citado ordenamiento, pues establece el derecho que tienen las personas detenidas en el centro de detención a que el Municipio les brinde atención médica y luego señala que para ese efecto el Municipio contará con un médico de guardia, quien contará con un área médica, que deberá contener el cuadro básico de medicamentos y material de curación suficiente, para la atención de los primeros auxilios de éstos. De igual forma el artículo 1755, fracción IV del Código el cita dispone que es obligación del oficial de guardia solicitar en su caso el examen psicofísico de las personas presuntas infractoras puestas a disposición del Juez Calificador. De las

⁹ Idem

disposiciones legales citadas se desprende la obligación del Municipio El Llano de contar en el centro de detención con un área médica que debe contener el cuadro básico de medicamentos y material de curación suficiente para la atención de los primeros auxilios, área que deberá contar con un médico responsable, sin embargo, de la visita de supervisión se constató que no existe, a pesar de estar contemplada legalmente.

19. En el mismo sentido, la regla 24 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) referente a los servicios médicos establece “1. La prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado”, mientras la regla 30 dispone “Un médico u otro profesional de la salud competente, esté o no a las órdenes del médico, deberá ver a cada recluso, hablar con él y examinarlo tan pronto como sea posible tras su ingreso y, posteriormente, tan a menudo como sea necesario”. El Principio 24 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión dispone que se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Las disposiciones internacionales también prevén la obligación de las autoridades municipales de brindar atención médica a las personas que ingresan como detenidas al centro de detención, además de prever que la certificación médica de deberá realizarse inmediatamente después del ingreso de la persona infractora al centro de detención municipal, tal obligación también está contemplada en el artículo 1183 fracción I del Código Municipal de El Llano, pues dispone que una de las obligaciones del médico de guardia es realizar la consulta y exámenes necesarios para corroborar su estado de salud, en este sentido, la persona en turno en el área médica deberá revisar a la persona detenida a su ingreso al centro de detención, durante su estancia tan a menudo como sea necesario y al egreso de su estancia, pues esos documentos son los que acreditan las condiciones físicas en que se encontraba la persona detenida a su ingreso, durante su estancia y al egreso del centro de detención.

20. En el acta circunstanciada de fecha quince de septiembre de dos mil veinticinco se hizo constar que las personas detenidas carecen de acceso a lavamanos para el lavado de manos, lo que contribuye a un ambiente insalubre y antihigiénico que puede tener un impacto negativo en su salud. El principio número XII, punto dos, primer párrafo de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas establece que las personas privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad. Asimismo, tendrán acceso a productos básicos de higiene personal y a agua para su aseo personal, conforme a las condiciones climáticas. De igual manera, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) relativas al alojamiento, señala en su regla 13 “*Los locales de alojamiento de los reclusos deberán cumplir todas las normas de higiene*”¹⁰; la regla 15 dice que “*Las instalaciones de saneamiento serán adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno y en forma aseada y decente*”¹¹ y la regla 17 establece “*Todas las zonas del establecimiento penitenciario que frecuenten los reclusos deberán mantenerse limpias y en buen estado en todo momento*”¹². Las disposiciones legales citadas establecen el derecho de las personas detenidas a tener acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y

¹⁰ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, *Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)* (Viena: Asamblea General, resolución 70/175, anexo, 2015), Página 6.

¹¹ *Idem*

¹² *Idem*

funcionales, lo que implica que tengan acceso a lavarse las manos, por lo que es necesario las autoridades municipales realicen las acciones que sean necesarias para que las personas detenidas puedan lavarse las manos cuando lo necesiten y así preservar su salud.

21. Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, considera que las autoridades del centro de detención municipal de El Llano, Aguascalientes deben implementar acciones para el respeto de los derechos humanos de las personas que ingresan y permanecen en resguardo o detenidas en ese centro de detención, por lo que se emiten las siguientes:

III. RECOMENDACIONES

22. A la persona titular de la **Secretaría del H. Ayuntamiento de El Llano, Aguascalientes**, en términos de los artículos 1 párrafo tercero y 115 fracción III, inciso h de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 236 fracción III y 1095 del Código Municipal de El Llano, Aguascalientes, respetuosamente se recomienda instruir a quien corresponda para que:

- a) Se deje registro en un libro sobre el control de las llamadas permitidas a las personas detenidas, debiendo hacer constar el número telefónico al que se llame, la hora en que se realiza la llamada por parte de la persona detenida, y de ser posible el nombre de la persona con quien se entrevistó vía telefónica, así como la firma de la persona detenida donde acepta haber realizado dicha llamada.
- b) Girar las instrucciones a quien corresponda para que el centro de detención cuente con un área médica con el equipo necesario para prestar los servicios de primeros auxilios y medicamentos del cuadro básico. De igual forma cuente con personal médico las veinticuatro horas del día todos los días de año para que revisen el estado físico de todas las personas que ingresan en calidad de arrestadas o detenidas al centro de detención y que dicha revisión se realice a su ingreso y a su egreso, además de que realicen supervisiones y atenciones médicas durante la permanencia de las personas detenidas.
- c) Se realicen las acciones necesarias para que las personas detenidas tengan acceso de forma segura e higiénica a un lavamanos en el que puedan lavar las manos cuando sean necesario y así cuidar de su salud.

Así lo proveyó y firmó **Yessica Janet Pérez Carreón**, en su carácter de **Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes**. conste.

Elaboró pgs.

